

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 11º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-5691-2020
CARATULADO : GUTIÉRREZ/FISCO DE CHILE / CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, once de agosto de dos mil veintidós.

Visto:

Que compareció don **Boris Paredes Bustos** abogado, domiciliado en Pasaje Dr. Sótero del Río N° 326, oficina N° 707, comuna de Santiago, en nombre y representación de don **Manuel José Gutiérrez Córdova**, profesor universitario, domiciliado en 3123 Flatwood Ct, Pearland, Texas 77584, Estados Unidos y para estos efectos en Doctor Sótero del Río Nro. 326, oficina Nro. 707, Santiago, y de don **Raúl Hernán Gutiérrez Córdova**, comunicador social y sociólogo, domiciliado en Ensenada, Sitio 23, Lote 10, Parcela 23-B, Aguila Sur, Paine, quien dedujo deduce demanda civil de indemnización de perjuicios por crímenes de lesa humanidad en juicio ordinario de hacienda, en contra del **Fisco de Chile**, persona jurídica de derecho público, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, ambos domiciliados en Agustinas 1687, edificio Plazuela de Las Agustinas, comuna de Santiago, y solicitan que en definitiva la demandada sea condenada al pago de la suma de **\$200.000.000** (doscientos millones de pesos) **para cada uno de los demandantes**, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo, o la suma que se determine ajustada a derecho, justicia y equidad, con costas.

Señaló que uno de los demandantes, don **Manuel José Gutiérrez Córdova**, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech 2 N° 3.846, nacido el 10 de Diciembre de 1956, de actuales 63 años de edad, a la fecha de ocurrencia de los hechos cursaba estudios en el tercer año medio.

Expuso que nació en Lota, donde vivió hasta los 4 años, ya que su familia se trasladó a vivir a Coronel; en esta ciudad vivió durante el resto de su vida en Chile. Allí cursó sus estudios primarios y secundarios. Luego de terminar sus estudios universitarios en la Universidad de Concepción, como



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QGKFXXXJPEV

Profesor de Español y luego como Magister en Lingüística, en 1984, salió de Chile hacia Los Ángeles, California, donde continuó estudios doctorales. Una vez que obtuvo el grado de Doctor en Lingüística, trabajó en la Universidad de Wisconsin y posteriormente aceptó un puesto en la Universidad de Houston. En esta universidad continúa trabajando y en esta ciudad y estado (Texas) reside actualmente.

Contó que mientras vivía en Coronel, en el año 1973, al estar cursando el tercer año medio, participaba en múltiples actividades de naturaleza social y educativa, e ingresó a las Juventudes Comunistas y se desempeñó como dirigente estudiantil por un tiempo; también aceptó responsabilidades dentro de la organización política. Su familia, de reconocida trayectoria comunista, lo apoyaba en todos sus proyectos.

Continuó su relato indicando que el 11 de septiembre de 1973 comenzó la más dura represión que se ha conocido en el país, y veía a diario como compañeros, amigos, vecinos eran apresados por los carabineros y militares. Por lo anterior, junto a su hermano Raúl e igualmente su padre, debieron ocultarse en distintas casas de amigos por semanas, lo que perjudicaba sus estudios por impedirle asistir a clases, por lo que a fines de septiembre, junto a la familia decidieron retomar su vida normal. Volvió a clases, pero en octubre, en medio de un despliegue policial y militar desproporcionado y violento, fueron literalmente sacados como delincuentes de las distintas salas de clase en que mi hermano, otros dos estudiantes y él se encontraban.

Luego, a culatazos de fusiles y ataques verbales fueron "escortados" por agentes del estado de Chile por las calles de la ciudad hasta la Comisaria de Coronel, ubicada en ese tiempo en la calle Lautaro. Los maltratos que a plena vista de la gente ocurrieron se multiplicaron de manera infinita cuando las paredes permitían ocultar las acciones de la policía. Agregó que el trato dentro del calabozo, en que había también otras personas detenidas por delitos comunes, era aterrador; pero lo era aún más cuando lo sacaban para golpearlo y torturarlo de manera selectiva. Las preguntas eran ridículas: qué libros habíamos ido a botar, por ejemplo.

Explicó que al día siguiente, lo separaron de su hermano, a quien lo dejaron en Coronel, y a él llevaron al Cuartel de Puchoco-Schwager, que



aún existía en esa época, en donde fue incomunicado en un calabozo oscuro, húmedo e insalubre. Se imaginó que estuvo varios días allí, ya que se hacía imposible llevar cuenta del tiempo por las características del lugar, pero tiene recuerdos vagos del lugar; y sintió una impotencia tremenda al ser mantenido en este tipo de lugares sin haber cometido delito.

Añadió que después de algunos días me llevaron nuevamente a Coronel, donde lo juntaron con su hermano y con otros 3 estudiantes del Liceo de Coronel, luego los trasladaron en un jeep a la tenencia de Las Paralelas, para esperar otro transporte que los llevara a Concepción. Ahonda que otra vez fueron objeto de un trato indigno y abusivo, con uso de gases lacrimógenos que tiraban al espacio reducido que constituía la celda, muy congestionada por el alto número de detenidos que tenía, y en algún momento, el teniente Barra, conocido por su crueldad en las historias que contaban en Coronel, se acercó por la ventanilla de la celda y le tiró un chorro de un gas líquido directamente al ojo, con lo que sintió un dolor intenso que duró mucho tiempo; estaba muy preocupado de quedar con una afección permanente por este hecho. Después de esto y los abusos sufridos en los lugares pasados de reclusión y los que estaban por venir, se le desencadenaron migrañas terribles que le han durado hasta la actualidad. De manera similar, perdió parte importante de la audición, lo que compensó con distintas estrategias comunicativas un tiempo, hasta que tuvo que comenzar a usar audífonos.

Sostuvo que el posterior traslado a Concepción produjo en condiciones deplorables debido a la cantidad de seres humanos que trasladaban como si fueran animales, aparte de los golpes que recibíamos, que venían en cualquier momento, del personal de carabineros encargado del traslado, y las amenazas con aplicarnos la *ley de fuga* en el camino entre Coronel y Concepción.

Expuso que en Concepción, llegaron a la Cuarta Comisaría, que se encontraba en el lugar más alto en la escala de crueldad. Allí, había condiciones sin higiene de las celdas, lugares putrefactos, llenos de gente que sufría torturas diarias. Señaló que en distintas partes del cuerpo recibieron golpes de todo tipo con los instrumentos que la policía usa para infligir dolor, también usaban a menudo golpes de puño y patadas donde le



cayeran al prisionero. Además, al llegar los hicieron pasar muchas horas frente a una pared con las piernas extendidas y con las manos apoyadas en esta a una distancia que había que bajar el cuerpo para hacerlo, producto de lo cual por cansancio, se caían al piso, donde recibían una lluvia de golpes.

Luego, después de un par de días, los llevaron en un vehículo de carabineros o militar, al Estadio Regional, donde se encontraron con gente conocida y muchos otros de distintos lugares de toda la región. El estadio era una gran prisión y sus camarines funcionaban como celdas. Agrega que en distintos momentos tuvo que soportar castigos extremos, en especial la aplicación de corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo, especialmente en la zona genital, en interrogatorios sobre temas irrelevantes. Expuso que ni él ni su hermano tenían nada que aportar a los torturadores ni motivo para ser privados de libertad ni para ser torturados, y que estaban reclusos en este campo de concentración solo por el hecho de haber pertenecido a una juventud política que el gobierno había declarado enemiga.

Añadió que la situación era debilitante e indignante no solo por el dolor sufrido, sino también por la espera y saber que su madre, su padre (aún oculto para evitar un destino similar a otros, como los compañeros fusilados de Lota, por ejemplo) y sus hermanas sufrían por ellos. Todos los días su madre y hermanas se paraban en las afueras del estadio por si podían vernos algunos segundos cuando nos tocaba salir a buscar "el rancho", y era un alivio para ellas verlos.

Sostuvo que a mediados de diciembre de 1973 fue puesto en libertad sin explicaciones de ningún tipo, quedando con secuelas que le acompañan hasta el día de hoy producto de los hechos narrados y la tortura que se le infligió. Hasta la fecha no deja de recordar todo lo que vivió, padeciendo de trastorno de estrés post traumático. Su experiencia recorrió tres meses, de octubre a diciembre de 1973, y por su parte, su hermano seguía recluso y seguiría por largo tiempo. Nuestra familia, y ahora él entre sus integrantes, seguirían sufriendo por el sufrimiento injusto que este seguía experimentando.



Refirió que la condición de prisionero le persiguió por muchos años en el Chile de la dictadura, ya que si bien terminó la enseñanza media, ingresó en 1975 a la Universidad de Concepción, recibió el título en 1979 y comenzó a estudiar un Magister, y aunque recibió las más altas calificaciones y recibió el Premio Universidad por lo mismo, no tuvo éxito en su búsqueda de empleo. En una oportunidad le dijeron de manera directa que el informe de la CNI era muy importante para la decisión final. Lo mejor que consiguió fueron medias jornadas, una de ellas en la Sede Los Ángeles de la Universidad de Concepción, así que la única opción que le quedaba era postular al extranjero. Postuló a un programa doctoral y así fue como llegó a los Estados Unidos. Pidió permiso sin goce de sueldo para ello, pero el director de la sede, Patricio Lynch, le obligó a renunciar.

Respecto de **don Raúl Hernán Gutiérrez Córdova**, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura Nro. 10.855 nacido con fecha 28 de Octubre de 1954, de actuales 65 años de edad, a la fecha de ocurrencia de los hechos cursaba estudios en el cuarto año medio.

Expuso que para el 11 de septiembre del año 1973, fecha en que ocurrió el golpe de estado, se encontraba en calidad de estudiante de enseñanza media, cursando cuarto medio, en el Liceo Coeducacional de Coronel, Comuna de Coronel – 8va. Región, y se encontraba preparando para rendir la Prueba de Aptitud Académica para postular a una carrera universitaria. En aquella época militaba y era dirigente de las Juventudes Comunistas de Chile en la región, y además formaba parte de una familia entera de militantes comunistas, partiendo por mi padre, quien era el Secretario Local del Partido Comunista en la comuna de Coronel y también miembro de la Dirección Regional del partido en la zona del carbón.

Explica que a raíz de lo anterior, y producto de la persecución política su contra, me vi obligado a vivir por algún periodo en la clandestinidad, hasta que la familia, a fines de septiembre de 1973, resuelve que el junto a mi hermano menor volvieran a clases con el objetivo de normalizar sus estudios como estudiantes regulares, intento que duró poco dado que a los pocos días de haber retomado las clases, un gran contingente de militares, junto a carabineros, irrumpió en el liceo con el propósito de sacarlo preso junto a su hermano menor Manuel José Gutiérrez Córdova y a otros dos



compañeros del mismo establecimiento. Este fue el comienzo de un largo período de presidio, reclusión, torturas y tormentos físicos y psicológicos, que duró aproximadamente un año; y que fue posteriormente reemplazado por un arresto domiciliario que le obligaba a tener que presentarse diariamente a firmar a la 3ra. División de Ejército en Concepción y también a la Comisaria de Carabineros en Coronel. Esta situación muchas veces implicaba verse expuesto a que le volvieran a detener y/o a someterlo a vejámenes injustos y apremios ilegítimos, como vuelta a la tortura, etc. El arresto domiciliario duró un poco más de tres años y medio, dado que, llegado el momento, en abril del año 1978, sale al exilio al viejo continente con destino a Londres, Inglaterra.

Luego, volvió en su relación al momento de la detención, y sostuvo que vivió un largo periodo de reclusión y desarrolló un largo recorrido por diferentes lugares de detención y de campos de concentración en diferentes regiones de Chile, dentro de los cuales se encuentra un comienzo en el Cuartel Central de Carabineros de Coronel, lugar en el que estuvo incomunicado y sometido a todo tipo de torturas durante al menos una semana, y que implicó la privación de sueño, en los interrogatorios siempre se utilizaba, ya que era una práctica habitual, y, además, la aplicación de corriente en diferentes partes del cuerpo tales como genitales, sienes, dedos de manos y pies y lengua. También lo sacaban durante la noche, semidesnudo, para golpearlo entre muchos, con golpes de mano, lumazos, además de culatazos con las armas de fuego, es decir lo que tuvieran los interrogadores a su alcance.

Refirió que al cabo de los días, en este mismo lugar, lo reunieron con su hermano menor, a quien los mismos militares y carabineros se habían llevado a otro lugar de reclusión, con el propósito de trasladarlos, junto a otros presos, a un cuartel de presidio de paso llamado Las Paralelas. En este lugar eran 8 personas presas en un pequeño calabozo de no más de 4x2 metros; a éste acudían durante la noche carabineros a tirarles gases lacrimógenos a su interior, hecho que transformaba el espacio en algo irrespirable. También durante la noche los sacaban de a uno, para maltratarlos con golpes de luma y manguerearnos con chorros de agua de mucha presión.



Agregó que posteriormente, en octubre de 1973, los trasladaron junto a un grupo numeroso de presos a Concepción en un vehículo de carga en condiciones infrahumanas dado su espacio y las características de éste, y que debieron hacer ese recorrido casi uno sobre el otro, lo que transformó en eterno dicho traslado. Una vez en Concepción, los llevaron a la temida y siniestra 4ta. Comisaría de Carabineros de Concepción, lugar que ya tenía un cartel de sanguinario, debido a que muchos Compañeros que habían pasado por este lugar fueron asesinados durante la aplicación de tormentos y torturas; uno de ellos fue el compañero Fernando Álvarez, quien era el intendente de Concepción para el momento de golpe de estado. Allí los tuvieron 3 o 4 días, junto a muchos otros presos de distintas comunas de la región del Bío-Bío, donde fueron torturados; así desde el comienzo los tuvieron sometidos a estar parados en un patio muy grande con los brazos y manos arriba por períodos de tiempo interminables, los encerraron en unos pequeños calabozos insalubres donde permanentemente se apersonaban carabineros con uniforme y sin uniforme a golpearlos con cualquier objeto contundente que tuvieran a mano o llevaran con ellos, como lumas, palos y también armas de fuego, con las cuales podían golpearlos, y simulaban que les iban a disparar, no se nos permitía el descanso y menos dormir;

Contó que luego de los 3 o 4 días en la 4ta. Comisaría de Concepción, los trasladaron, junto a su hermano y a otros, al Estadio Regional de Concepción, que funcionaba como un campo de concentración masivo. Allí estuvo preso hasta mediados de enero del año 1974, donde le tocó vivir de todo, porque lo tuvieron incomunicado y vendado en 3 ocasiones y todas estas incomunicaciones duraron entre 4 y 6 días. Durante estos períodos las torturas y tormentos, a los que fue sometido, fueron muchos y variados, como la aplicación de corriente en todas las partes sensibles de mi cuerpo, en especial las zonas genitales; por estas torturas, y debido a que los torturadores le pusieron un electrodo dentro del ojo derecho, perdí la visión de ese ojo por un tiempo largo. También en un par de ocasiones lo colgaron de los brazos de una soga que pendía de una viga del calabozo; en otras ocasiones, le bombearon agua por la boca y nariz, y también lo golpearon mucho con puños y lumas; con estas últimas lo golpeaban principalmente en la planta de los pies, todas estas torturas y



tormentos siempre fueron acompañadas de interrogatorios interminables y extenuantes.

Explicó que a mediados de enero de 1974, a él y a un grupo aproximado de 60 compañeros los separan e incomunican de los otros casi 800 compañeros que estaban presos en este campo de concentración en ese momento, y los llevaron a una larga reclusión en una antigua oficina salitrera llamada Chacabuco; ubicada en medio del desierto de Atacama, a 104 kilómetros de Antofagasta, que había sido habilitada como campo de concentración para prisioneros políticos. Apenas llegaron, tipo tres de la mañana, los militares, quienes serían nuestros carceleros, los llevaron a una cancha de fútbol y los hicieron desnudar para tenerlos a la intemperie soportando una temperatura de escasos grados durante al menos 5 horas, tiempo que duró la lectura del sermón sobre el régimen carcelario a que estarían sometidos en este campo de concentración controlado por los militares. Allí los tuvieron incomunicados y separados del resto de los 1.200 compañeros provenientes de muchas partes del país que ya estaban presos en este lugar. Además, les decían que eran rehenes del régimen y que se encontraban en medio de desierto; siendo así, podrían ser usados para acciones de castigo ante hipotéticos actos en contra de Pinochet por parte de quienes todavía operaban en la resistencia contra el régimen

Refirió que su confinamiento en el campo de concentración de Chacabuco duró aproximadamente 7 meses. En julio de 1974 lo llevaron de regreso en calidad de detenido, primero al Cuartel de Investigaciones de Concepción y después con arresto domiciliario a la casa de sus padres. Estuvo sometido en un régimen de firma diaria hasta el mes de abril del año 1978, fecha en la que salió a un largo exilio a Londres, Inglaterra el cual duro cerca de 10 años. El año 1987 retornó definitivamente a Chile

Planteó a título de daño moral, como consecuencia directa del secuestro, torturas y prisión política de que fueron objeto sus representados, el pago de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) para cada uno de los demandantes o en su defecto el monto indemnizatorio que estime el Tribunal.

Señaló que es civilmente responsable el Estado de Chile, ya que a quienes se acusa su autoría, a la fecha de su comisión, eran miembros del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QGKFXXXJPEV

Ejército de Chile y de otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública o civiles adscritos a las mismas, quienes se encontraban revestidos de autoridad pública.

Añadió que el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en la práctica de secuestro y tortura ocurrida durante la dictadura militar, mediante distintos actos e instrumentos jurídicos, entre ellos cabe destacar el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Informe sobre Prisión Política y Tortura, denominado “Informe Valech”, y en este último, sus representados fueron reconocidos como víctimas de prisión política y tortura.

En cuanto al aspecto jurídico fundaron su demanda, en lo que se refiere a la responsabilidad del estado, señala la Constitución Política de 1980, y los artículos 4, y 10 N°s 1, 9 y 10 de la Constitución de 1925.

Indicó además, la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, fundado en que no corresponde aplicar las normas de derecho privado en la materia, sino que de derecho público, y citó un fallo de la Excma. Corte Suprema de 5 de septiembre de 2016, Rol N°24.288-2016 que sostiene dicha hipótesis.

Luego, volviendo sobre las normas referidas a la obligación de indemnizar por el Estado, su responsabilidad extracontractual la funda en los artículos 4 y 44 de la Ley 18.575, y en cuanto al Derecho internacional, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, artículo 131 de la Convención de Ginebra.

Continuó explicando que la responsabilidad del Estado es integral, es decir, debe repararse y todo daño causado a un particular, incluyendo el daño moral, acudiendo al artículo 2329 del Código Civil para fundarlo, y citó un fallo de la Corte Interamericana en el caso “Aloeboetoe y otros, Reparaciones” (Sentencia del 10 de septiembre de 1993, Serie C N° 15, párr. 76).

Finalmente, solicitó la condena respectiva.

Por escrito de 22 de mayo de 2020, compareció doña **Ruth Israel López**, abogada procuradora Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, domiciliados en Agustinas 1687, Santiago,



quien contestó la demanda civil de indemnización de perjuicios y solicitó su rechazo, con costas, o en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Alegó en primer lugar, la excepción sobre reparación integral e improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.

Sostuvo que las negociaciones entre el Estado y las Víctimas revelaron que tras toda la reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades pública a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos, y dicho concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación propusieron como programa de reparación.

Añadió que los programas incluyeron beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos, otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero, por lo que no es un secreto que las transiciones han estado en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones, y basta para ello revisar las discusiones originadas en la aprobación de la Ley 19.123, para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego.

Expresó en palabras de Lira, que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron, a saber: a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura; b) la provisión de reparaciones para los afectados y c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”.

Indicó que la Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamado Comisión Rettig, en su informe final propuso una serie de “propuestas de reparación”, entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud, añadiendo que dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al



Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro que por él se buscaba, en términos generales, reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas.

Agregó que la comisión entendió como reparación, “un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho informe”, y que ha dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”.

Manifestó que en la discusión de la Ley 19.123, el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, a modo de ejemplo, se hizo referencia a la reparación moral y patrimonial buscada por el proyecto. La noción de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas se encontraba también en otras tantas ocasiones. También estuvo presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación.

Indicó que la idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le correspondería especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas”, a que refiere el artículo 18.

Hizo presente que la ley 19.123, y las demás normas conexas, han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

Precisó que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de: a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derecho sobre prestaciones estatales específicas y c) reparaciones simbólicas.



Agregó que por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto del proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Planteó que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también, a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Destacó que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras aparecieron otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia.

Hizo presente que este tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2015, en concepto, a saber: a) Pensiones: la suma de \$199.772.927.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig); b) Pensiones: \$419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); c) Bonos: la suma de \$41.856.379.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047.- por la ya referida Ley 19.992; d) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-; y e) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$ 21.256.000.000.-. En consecuencia, a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-

Añadió que siguiendo una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual, y aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que se pueda valorizar para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Destacó que los actores han recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N°19.992 y sus modificaciones, la que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la nómina de personas reconocidas como víctimas.



Expresó que se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Consignó que el actor recibió en forma reciente el aporte único de reparación de la Ley 20.874, por la suma de \$1.000.000 (un millón de pesos), por lo que ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionados.

Estableció que la reparación no se realizó solo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU ha señalado que el objetivo del programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. Por ello, es que se concedió a los beneficiarios tanto de la ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país.

Hizo presente que además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del programa.

Añadió que se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios y superiores y el organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. A su vez, se concedieron beneficios de vivienda, correspondiente al acceso subsidios de vivienda.

Hizo presente y destacó además, todas las reparaciones simbólicas, entre otras, construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago, decreto N°121 sobre el día nacional el detenido desaparecido, construcción de museos de memoria y derechos humanos, el establecimiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos, entre otros.

Señaló que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de derechos humanos, han cumplido todos los estándares internacionales de



justicia transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente ha apuntado a compensar a víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales.

Explico que tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos y que los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

Opuso la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en artículo 2332 del Código Civil, en relación con artículo 2497 del cuerpo legal, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Indicó que la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrieron, ocurrieron respecto de don Manuel José Gutiérrez Córdova entre octubre y diciembre de 1973, y respecto de don Raúl Hernán Gutiérrez Córdova entre octubre de 1973 y julio de 1974.

Añadió que siendo el caso que entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda, ello es, el 4 de mayo de 2020, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio, opuso la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos del artículo 2515, en relación al artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la atendida fecha de notificación de la acción civil, transcurrió con creces el plazo que establece el artículo 2515.

Planteó que todos los derechos y acciones son prescriptibles, y como tal, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.



Expresó que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.

Añadió que efectivamente las normas del Título XLII del libro IV del Código Civil, que la consagran, y en especial, párrafo I, se ha estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, disposición que consagra un carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares, la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Refirió que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe duda renunciarla anticipadamente, por lo que la responsabilidad que se le atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tiene la misma finalidad: resarcir extrapatrimonial a través de un incremento patrimonial del afectado.

Citó como abono a su alegación, la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de 21 de enero de 2013, en donde se zanjó que el principio general que debe regir en la materia es el de la prescriptibilidad y diversas convenciones internacionales sobre la materia.

En cuanto al daño e indemnización reclamada y en subsidio, alega que el demandante ejerce sus acciones de carácter indemnizatorio por daño moral y solicita en dicho concepto, la suma de \$200.000.000, monto que resulta excesivo

Destaca con relación al daño moral, que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en la demanda y de acuerdo a los antecedentes que obren en autos, por lo que los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniario ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente.



Agregó que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino que solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Alegó que en la fijación del daño moral por los hechos de autos se debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por el actor de parte del Estado, conforme a las leyes mencionadas y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto la reparación del daño moral, añadiendo que de no accederse a ello implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Hizo presente que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los Tribunales de esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Alegó además que los reajustes solo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Sostuvo que a la fecha de la deducción de la demanda a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto, no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Hizo presente que los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Señaló que el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal, por lo que no procede



aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Adicionó que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por escrito de 26 de mayo del año 2020, la parte demandante evacuó el **trámite de réplica**, en el cual aparte de reiterar los fundamentos de hecho y de derecho ya expuestos en la demanda, manifestó que la demandada no desconoce los hechos en que la pretensión del demandante se funda.

Manifestó en cuanto a la excepción de reparación integral, el argumento el hecho de que su representado ha obtenido pensiones de reparación con arreglo a las leyes N° 19.992 y sus modificaciones, y la Ley N°. 20.874, aclarar que esto no es óbice para que se indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial, que es un tribunal de la República.

Agregó que la excepción de pago resulta irreconciliable con la normativa internacional, porque el derecho común interno sólo es aplicable cuando no contradice el derecho internacional, en materias de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. La preceptiva invocada por el Fisco, que sólo consagra un régimen de pensiones asistenciales, no es de ninguna manera incompatible con la indemnización que se persigue, ya que estas reparaciones no dan cabida para reparar todo el daño que se les ha ocasionado a las víctimas, y no se ha establecido en las respectivas leyes ya mencionadas, ningún régimen de incompatibilidad con las indemnizaciones judiciales, ni mucho menos que su aceptación implique una renuncia a las acciones judiciales correspondientes.

En cuanto a la excepción de prescripción, señaló que la Excma. Corte Suprema ha sido enfática en señalar en múltiples ocasiones que, tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, la que es integrante del



ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, y que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, por violación a los derechos humanos en el periodo 1973-1990, comprendidas en los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Indicó a modo referencial las sentencias de la Exma. Corte Suprema Roles N° 20.288-14, de 1 de abril de 2015; N° 1-424-2013 de 1 de abril de 2014; N° 22.652-2014 de 31 de marzo de 2015; entre otras. Además citó los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa caratulada “Velázquez Rodríguez con Honduras”, y el caso de “Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas”, sentencia de 27 de noviembre de 1998.

Respecto al monto de la indemnización, sostuvo que el monto demandado es ajustado a la justicia, ya que se trata del daño moral de la mayor entidad. Los montos de las indemnizaciones se han ido incrementando y se está llegando a indemnizaciones reales y serias, sobre todo en aquellas demandas en las que es el Estado quien debe responder por graves crímenes cometidos en contra de sus propios ciudadanos.

Y en cuanto a los reajustes e intereses solicitados, aseveró que están conforme a derecho, puesto que un tribunal fija los montos en un momento determinado, pensando en el valor adquisitivo de esa fecha, razón por la cual tiene que considerar la desvalorización.

Por escrito de 2 de junio de 2020, la demandada evacuó el **trámite de dúplica**, en el cual manifestó ratificar la totalidad de los argumentos expresados en el escrito de contestación.

Precisó que el Fisco de Chile ha establecido diversas vías de reparación tanto a favor de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos como a beneficio de sus familiares más próximos, ya sea mediante actos concretos de reconocimiento como son los diversos



memoriales levantados a lo largo del país en recuerdo de las víctimas, como a través del pago de indemnizaciones y otras prestaciones establecidas por las llamadas leyes de reparación, habiéndose hecho entrega de diversas sumas de dinero a favor de los actores de autos.

Manifestó en cuanto a la excepción de prescripción, que los demandantes no advierten la importancia de la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013 Sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno”, en el que se consideró que la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescribía conforme a lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil, en 4 años.

Luego citó el fallo pronunciado por la Excma. Corte Suprema en los autos caratulados “Domic con Fisco”, ingreso CS. 4753-2001, y sostuvo que esta discusión ha quedado definitivamente zanjada en el fallo del Pleno de la Excma. Corte a que se ha referido.

Concluyó señalando que respecto de las otras alegaciones, se remite a lo señalado en la contestación.

Mediante resolución de 3 de junio del año 2021, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: **1)** Efectividad de haber sido detenidos Manuel José Gutiérrez Córdova y Raúl Hernán Gutiérrez Córdova por Agentes del Estado de Chile. Fecha y condiciones; **2)** Torturas, lesiones corporales, amenazas, golpes y demás actos vejatorios aplicados a Manuel José Gutiérrez Córdova y Raúl Hernán Gutiérrez Córdova, por agentes del Estado. Lugar, Fechas, circunstancias y características de los mismos.; **3)** Si los demandantes han recibido algún bono, pensión y/o cualquier otra transferencia directa de dinero consagrada por la Ley 19.123, Ley 19.980 o cualquier otra normativa establecida al efecto. Fecha y cantidad; **4)** Fecha de notificación legal de la presente demanda; y **5)** Existencia, origen, naturaleza y monto de los perjuicios demandados.

Por resolución de 14 de enero de 2022, se citó a las partes a oír sentencia.

Considerando:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QGKFXXXJPEV

Primero: Que ha comparecido don **Boris Paredes Bustos** abogado, en nombre y representación de don **Manuel José Gutiérrez Córdova**, y de don **Raúl Hernán Gutiérrez Córdova**, y deduce demanda civil de indemnización de perjuicios por crímenes de lesa humanidad en juicio ordinario de hacienda, en contra del **Fisco de Chile**, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, y solicitan que en definitiva la demandada sea condenada al pago de la suma de **\$200.000.000** (doscientos millones de pesos) **para cada uno de los demandantes**, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo, o la suma que se determine ajustada a derecho, justicia y equidad, con costas.

Fundamentaron su demanda de indemnización de perjuicios en antecedentes de hecho y de derecho expuestos en la parte expositiva de esta sentencia.

Segundo: Que la demandada se opuso a la acción indemnizatoria, basando su solicitud de rechazo en la reparación integral e improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante; excepción de prescripción extintiva; oposición al daño e indemnización reclamada. En subsidio, sostuvo que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por el Estado y guardar armonía con los montos que establecen los tribunales y, finalmente, alegó la improcedencia del pago de reajustes e intereses, las que funda en alegaciones de hecho y de derecho ya expuestas en la parte expositiva de este fallo.

Tercero: Que conforme a las reglas de la carga de la prueba, incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o éstas, de conformidad a lo dispuesto en artículo 1698 del Código Civil.

Cuarto: Que antes de adentrarnos a las alegaciones exhibidas por la demandada, corresponde acreditar la existencia o no de los presupuestos fácticos que causaron al actor apremios ilegítimos por parte de agentes del Estado en tiempos de la dictadura militar.

Quinto: Que, para tales efectos, los actores acompañaron a la causa, la siguiente prueba instrumental no objetada de contrario:

1.- Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e



incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia.

2.- Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

3.- Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de junio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

4.- Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.

5.- Artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.-

6. Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 2, en la que don Manuel José Gutiérrez Córdova figura bajo el número 3.846.

7. Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1, en la que don Raúl Hernán Gutiérrez Córdova figura bajo el número 10.855.

7. Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1.

8. Evaluación psicológica de don Manuel José Gutiérrez Córdova emitido por el PRAIS Metropolitano Sur Oriente, de fecha 8 de marzo de 2021

9. Evaluación psicológica de don Raúl Hernán Gutiérrez Córdova emitido por el PRAIS Metropolitano Sur Oriente, de fecha 8 de marzo de 2021

10. Certificado médico de don Raúl Gutiérrez Córdova emitido por el Dra. Olga Neira Burgos, con fecha 28 de Enero de 2021.

11. Receta médica de lentes ópticos emitida por la Dra. Olga Neira Burgos respecto de don Raúl Gutiérrez Córdova, de fecha 28 de Enero de 2021.

Sexto: Que de los antecedentes referidos en considerandos quinto de esta sentencia, valorados conforme las reglas establecidas en los artículos 1700 y 1702 del Código Civil, es posible tener por acreditado que don



Manuel José Gutiérrez Córdova y don Raúl Hernán Gutiérrez Córdova fueron detenidos a fines de septiembre de 1973 por militares y carabineros, en una operación que efectuaron en el Liceo Coeducacional de Coronel donde se encontraban cursando en enseñanza media.

Respecto de don Manuel José Gutiérrez Córdova, con 16 años, fue detenido en octubre de 1973 en su sala de clases, junto a su hermano don Raúl Hernán que estudiaba en el mismo Liceo Coeducacional de Coronel, y fueron sacado y trasladados en forma violenta por carabineros y militares hasta la Comisaria de Coronel, en donde fue golpeado e interrogado. Al día siguiente lo trasladaron al Cuartel de Puchoco-Schwager en donde se mantuvo incomunicado en un calabozo oscuro, Luego de unos días, lo llevaron a Coronel y lo trasladaron a la tenencia de Las Paralelas, en donde fue torturado con gases lacrimógenos en espacios reducidos y hacinados, y además, un carabinero denominado teniente Barra se acercó por la ventanilla de la celda y me tiró un chorro de un gas líquido directamente al ojo.

Posteriormente, fue trasladado a la Cuarta Comisaría, en donde lo tuvieron parado en un patio muy grande con los brazos y manos arriba por períodos de tiempo interminables, y a golpes si se caía, y encerrados en calabozos insalubres en donde eran golpeados con objetos contundentes. Luego de algunos días, es trasladado al Estadio Regional, en donde fue torturado con aplicación de corriente eléctrica en partes sensibles, e interrogados.

En diciembre de 1973, fue puesto en libertad, pero su condición de prisionero le perjudicó encontrar trabajo posteriormente, aun contando con título profesional y un magister, y contar con altas calificaciones y un premio por dicho merito, por lo que tuvo que emigrar del país gracias a una beca para cursar un doctorado en Estados Unidos, donde se radicó.

En el caso de don Raúl Hernán, con 17 años, fue detenido en octubre de 1973 y trasladado Cuartel Central de Carabineros de Coronel, donde se mantuvo incomunicado y sometido a torturas como privación de sueño, aplicación de corriente en diferentes partes sensibles del cuerpo tales como genitales o sienes, fue sacado por la noche para golpearlo con objetos contundentes. Luego de unos días, fue trasladado a otro lugar llamado Las



Paralelas, donde se mantuvo privado de libertad en un espacio pequeño y en hacinamiento, y sometido a gases lacrimógenos, y sometido a golpes con luma y chorros de agua a presión.

Posteriormente, en octubre de 1973 fue trasladado a Concepción, donde primero pasó por la Cuarta Comisaria en donde lo tuvieron parado en un patio muy grande con los brazos y manos arriba por períodos de tiempo interminables, y a golpes si se caía, y encerrados en calabozos insalubres en donde eran golpeados con objetos contundentes. Además, eran amenazados de muerte con armas de fuego, y no les dejaban descansar ni dormir. Luego de algunos días, es trasladado al Estadio Regional de Concepción, donde se mantuvo incomunicado por varios días, y a veces vendado. Aquí también fue torturado con corriente en partes sensibles del cuerpo, e incluso le pusieron un electrodo dentro del ojo derecho, perdiendo la visión de ese ojo por un tiempo largo. Además, fue golpeado, colgado de los brazos y torturado con agua por la boca y nariz.

En enero de 1974, fue trasladado desde el Estadio Regional de Concepción al centro de ubicado en una antigua oficina salitrera llamada Chacabuco; ubicada en medio del desierto de Atacama, a 104 kilómetros de Antofagasta, en donde lo llevaron desnudo en la madrugada con baja temperatura y lo mantuvieron por 5 horas así mientras lo instruían de las reglas del recinto. Allí también fue incomunicado y se le señaló junto a los otros presos que eran rehenes del régimen frente a atentados por parte de quienes todavía operaban en la resistencia. En dicho lugar se mantuvo alrededor de 7 meses y en julio de 1974 fue llevado a Concepción, donde quedó con arresto domiciliario en la casa de sus padres, y quedó sujeto a firma diaria hasta el mes de abril del año 1978, cuando sale a exilio a Londres, Inglaterra por 10 años, retornando en 1987.

Lo anterior se encuentra acreditado al figurar en el informe de Comisión Valech I y II, y el contenido de los informes de evaluación psicológica emitidos por el PRAIS Metropolitano Sur Oriente, el 8 de marzo de 2021. Suma a lo anterior, que el demandado no controvertió los hechos de la demanda, y sus argumentos parten de la base de su existencia al reclamar reparaciones integrales, parciales, o la prescripción de la acción.



Séptimo: Que, por otro lado, respecto don **Manuel José Gutiérrez Córdova**, se encuentran acreditados los efectos que le causaron al actor los apremios ilegítimos a los que fue sometido. En este punto, especial relevancia cobra el informe de evaluación psicológica emitido por el PRAIS Metropolitano Sur Oriente, que da cuenta, a su vez, de las torturas que le fueron proporcionadas por parte de Agentes del Estado.

Expone el informe que en octubre de 1973, cuando tenía 16 años, junto a su hermano Raúl, un año mayor que él, fueron tomados detenidos. Producto de la violencia del Estado sufrida desde octubre de 1973 hasta diciembre del mismo año, don Manuel sufre diversas consecuencias que lo afectan hasta la actualidad, y más aun considerando su edad, en el que estaba en un proceso identitario relevante, que se vio abruptamente interrumpido.

Continúa el informe indicando que luego de haber salido en libertad, tuvo una vida universitaria exitosa en la Universidad de Concepción, obteniendo reconocimientos de su misma casa de estudios, pese a la persecución política. Sin embargo, esta persecución influyo en la discriminación a cargos de orden académico, que pese a tener méritos suficientes, e incluso superiores a los pares con quienes competía por los puestos de trabajo, era dejado fuera del proceso, y había un reconocimiento más o menos explícito que quedaba fuera debido a sus antecedentes políticos. Por lo anterior y la persecución por parte de agentes de Estado, es que busco fuera del país la posibilidad de seguir formándose y encontrar trabajo, primero en España, y luego en Estados Unidos, en donde tiene su domicilio actual en la ciudad de Houston, del estado de Texas.

En el plano psicológico, su experiencia le ha provocado **trastorno de estrés postraumático**, que muestra cierta cronicidad en el tiempo.

En este punto es evidente que se encuentran acreditados el daño y el nexo causal que existe entre los hechos que conculcaron los derechos humanos de la víctima y los daños producidos por las torturas.

Octavo: Que en el caso de don **Raúl Hernán**, también se encuentran acreditados los efectos que le causaron los apremios ilegítimos a los que fue sometido. Igualmente cobra relevancia el informe de evaluación psicológica emitido por el PRAIS Metropolitano Sur Oriente.



Expone el informe que producto de la violencia del Estado sufrida desde fines de septiembre de 1973, y su prisión política durante alrededor de un año, sufre de diversas consecuencias que lo afectan hasta la actualidad. Se expone que en don Raúl se ve afectado en su vida, con cierto estado depresivo y perdido del sentimiento de sí. Además, presenta cierta paralización de sí ante estímulos que lo recuerdan su detención, y desorden en el sueño por recuerdo traumáticos.

En el plano psicológico, su experiencia le ha provocado **trastorno de estrés postraumático y un trastorno depresivo mayor**, los cuales muestran cronicidad.

En el plano físico, cobra relevancia el certificado médico emitido por la oftalmóloga doña Olga Neira Burgos, el 28 de enero de 2021, quien dando sustento a la relación de violencia en el ojo derecho de don Raúl por la aplicación de electricidad, da cuenta que al día de hoy presenta un desprendimiento de retina donde no recupera visión y pérdida total ella, aun siendo tratada en Inglaterra. Agrega el certificado, que don Raúl necesita lentes de lejos y de cerca, para lograr un 40% de visión en su ojo izquierdo.

En este punto es evidente que también se encuentran acreditados el daño y el nexo causal que existe entre los hechos que conculcaron los derechos humanos de la víctima y los daños producidos por las torturas.

Noveno: Que conforme lo establece la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984, tortura es *“Todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, que sean inherentes o incidentales a éstas”*.



Decimo: Que las consecuencias psicológicas derivadas de la tortura varían según la gama de situaciones vivenciadas, pasando desde cuadros reactivos inmediatos hasta consecuencias de más largo plazo. Los efectos son principalmente sentirse inseguros y atemorizados; humillados, avergonzados y culpables; deprimidos, angustiados y desesperanzados, además de alteraciones de la concentración y de la memoria; presencia de conflictos, crisis y rupturas familiares, así como a problemas de pareja; pérdida de grupos de referencia y de redes sociales; tristeza y sentimientos depresivos que reaparecen a propósito de fechas significativas asociadas con estos sucesos; trastornos del sueño e insomnios crónicos; inhibiciones conductuales, fobias y temores (v. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Consecuencias de la prisión política y la tortura, Capítulo VIII).

Conforme lo establece el Colegio Médico de Chile *“El dolor físico profundo, implica que el cuerpo torturado está intervenido; sus funciones inhibidas y que el contenido de la conciencia - aquellos pensamientos y afectos por lo que el sujeto se mantiene querido y valorado- ocasionalmente pueden ser destruidos. El dolor físico, adquiere una real similitud con la muerte en su dimensión de experiencia psíquica, es decir, los territorios donde la tortura es ejercida tanto física como psíquicamente se transforman en uno: cuerpo dañado y vivencia menoscabada bajo una amenaza representada con carácter similar a la muerte”* (Pizarro Céspedes, Angélica, *“Tortura y Trama: Consecuencias, Valoración del Daño”*, Colegio Médico de Chile).

Undécimo: Que los tormentos, agresiones y vejámenes físicos y psicológicos a que fueron sometidos los actores, en el tiempo que fueron detenidos por agentes del Estado, a la luz de la definición conceptualizada en los motivos séptimo y octavo, sin lugar a dudas es que debe ser calificada como tortura y sobre la base de ello han de analizarse los presupuestos de la responsabilidad demandada. Por otro lado, la acción por parte de dichos agentes se encuentra debidamente asentada en el Informe Valech y los demás antecedentes probatorios acompañados relacionados con las atenciones clínicas efectuadas a los actores. Asimismo, no resultó ser un hecho negado por parte de la demandada, la circunstancia de la detención y los apremios ilegítimos recibidos por los demandantes, lo que



permite darle un mayor valor a la existencia de los tormentos recibidos por estos últimos.

Duodécimo: Que, así las cosas, con los hechos asentados a partir de la prueba documental rendida, permiten tener por acreditado el daño sufrido por los actores, el que no sólo fue físico, sino que psicológico y moral, desde que tuvo por objeto la tortura y la degradación de su persona, con el objeto no sólo de anularlo, sino de obtener la información pretendida con los salvajes interrogatorios de que fueron víctimas.

Por su parte, con el mérito de los informes descritos en el motivo séptimo y octavo de esta sentencia, queda en evidencia que existe un nexo causal entre la acción desplegada por los agentes del Estado que detuvieron a los actores y los sometieron a torturas, con el daño que hasta el día de hoy se encuentra vigente, no obstante haber transcurrido casi 50 años de tan lamentables episodios.

Décimo tercero: Que, previo a determinar la procedencia de la indemnización y su *quantum*, cabe hacerse cargo, previamente, de las alegaciones de pago y prescripción hechas valer por el Fisco de Chile.

Décimo cuarto: Que respecto de la excepción de pago planteada por el Fisco de Chile, dicha resistencia se basa en que la Ley N°19.123 establecería beneficios pecuniarios para los familiares de víctimas de derechos humanos cuyo objetivo sería el de indemnizar justamente el daño por ellas sufrido a consecuencia de actos lesivos desarrollados por agentes del Estado.

Lo anterior importa analizar la naturaleza jurídica de los beneficios contemplados en la referida ley, para luego verificar si respecto de ello concurren los presupuestos del pago invocado.

Que la historia fidedigna de la Ley N°19.123, en cuanto elemento de interpretación de la ley, según lo dispone el inciso segundo del artículo 19 de Código Civil, pone de manifiesto que durante la tramitación parlamentaria el debate fue justamente sobre la conceptualización y determinación de la naturaleza jurídica de los beneficios pecuniarios que se otorgarían por medio de ella.

El Senador Máximo Pacheco, refiriéndose a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, sostuvo que la misma “*entendió por reparación un*



conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia del informe. La reparación ha de convocar a toda la sociedad chilena; ha de ser un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas. El proceso de reparación supone el coraje de enfrentar la verdad y la realización de justicia; requiere de generosidad para reconocer las faltas y de actitudes de perdón para llegar al reencuentro de los chilenos. Es verdad que la desaparición de o la muerte de un ser querido constituyen pérdidas irreparables; por lo que no es posible establecer una correlación entre el dolor, la impotencia y las esperanzas de las víctimas, con las medidas que se proponen. No obstante ello, la reparación moral como material, parece ser una tarea absolutamente necesaria para el afianzamiento de una democracia plena”.

Por su parte, interviniendo el Ministro de Estado señor Correa, a la época, Secretario General de Gobierno, expresó que “*El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, concordante con el mandato del Presidente de la República, presentó al país el cuadro de una situación desgarradora (...) y ha informado (...) del dolor de todos, sin mirar el color de los que murieron por violaciones a los derechos humanos y de quienes murieron por violencia política*” y agregó que “*El reconocimiento de responsabilidades, la administración de justicia por tribunales competentes –de acuerdo a la ley vigente- y la reparación parcial del daño, son las obligaciones que han debido asumir –y deben seguir haciéndolo- los Poderes Públicos y las dirigencias políticas, sociales, religiosas y humanitarias. El proyecto de ley que hoy se somete a la consideración de la Sala se inscribe en ese propósito. Por un lado establece compensaciones y pensiones para los familiares directos de las víctimas y, por otro, encarga a una corporación de alto nivel, designada por el Presidente de la República y con acuerdo del Senado, el cumplimiento, por un tiempo fijo, de las labores de asistencia y apoyo a aquéllos, así como de la ejecución de las recomendaciones de la propia Comisión Nacional de Verdad y*



Reconciliación, en orden a complementar antecedentes en los casos en los que ella no se formó convicción”.

Es en este contexto, tal como lo exponen las autoridades citadas, que se presenta el proyecto de ley que termina siendo aprobado y que crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y establece beneficios a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Ahora bien, la ley en análisis estableció una pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política (artículo 17), pensión que tiene fijada por ley el monto y los beneficiarios, los que por lo demás son desagregados según sea la vinculación que tengan con la víctima y su edad, instituyendo beneficios médicos (artículo 28) y educacionales (artículos 29; 30; y, 31), entre otros.

En relación con la historia fidedigna de la ley, sumado a las características de los beneficios que ella otorga, es posible concluir que no se trata de una reparación total al daño sufrido por las víctimas, sino de una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de los familiares de las víctimas, conceptualización que permite entender los beneficios que se conceden, como por ejemplo, los relacionados con educación y salud, los que quedan supeditados a condiciones objetivas para su goce, como lo es la edad y el hecho de estar o no cursando estudios superiores.

Consecuencia de lo reseñado precedentemente es que los beneficios pecuniarios que contempla la Ley N°19.123 tienen una naturaleza asistencial y por ende no privan a las víctimas de instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido.

En este punto, conviene precisar que son numerosas las sentencias nacionales que afirman que entre nosotros rige el llamado “principio de la reparación integral o completa”, el cual ordena que la reparación que se decreta deba ser exactamente igual al daño sufrido.

En tal sentido se ha resuelto que la reparación “debe ser completa, igual al daño que se produjo, de tal forma que permita a la víctima reponer las cosas al estado en que se hallaban antes de la comisión del delito que la afectó; debiendo quedar su patrimonio como si el daño no se hubiera



producido (v. C. Suprema, 10 de enero de 1985, en Rev., t. 82, sec. 4°, pág. 4. En el mismo sentido, C. Apelaciones de Santiago, 9 de mayo de 1985, Rev., t. 82 sec. 4°, pág. 151 y C. S., 10 de octubre de 1985, Rv., t. 82, sec. 4°, pág. 240).

En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de la reparación integral encuentra su asidero en el artículo 2314 del Código Civil y, muy especialmente, en el inc. 1° del artículo 2329 de dicho cuerpo normativo que señala: *“Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”*.

El profesor Ramón Domínguez Águila hace ver que para afirmar con propiedad si en un sistema jurídico se reparan efectivamente todos los daños es menester indagar sobre dos aspectos:

a) Cuál es la noción de daño que se tiene, y si dentro de ésta se cubren efectivamente todas las alteraciones a la situación existente antes del hecho dañoso (punto de vista cualitativo), y

b) Si en el hecho se reparan todos los daños sufridos, lo que, mirado desde el punto de vista de la indemnización pecuniaria, consiste en saber si “en equivalencia monetaria se hace pagar al hechor la integridad de aquellos que en un cierto sistema se considera que son daños” (v. Domínguez Águila, Ramón, *Consideraciones en torno al daño en la responsabilidad civil. Una visión comparatista*, en *Revista de Derecho, Universidad de Concepción*, N°136, 1966, pp. 136 y 137).

Aclarado lo anterior, hay que precisar que la normativa invocada por el Fisco no contempla en su texto incompatibilidad alguna con la indemnización que por este proceso civil se persigue y no resulta procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata, como se dejó asentando en los párrafos precedentes, de formas distintas de reparación y, el que las asuma el Estado voluntariamente, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que la tutela judicial efectiva declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues pensar de otra manera, sería aceptar que el responsable del daño sea quien fije la cuantía de la indemnización a pagar.



Por lo anteriormente razonado, es que **se desestima la excepción de pago opuesta por el Fisco de Chile.**

Décimo quinto: Que, en cuanto a la prescripción de las acciones civiles, afirma que desde la fecha de los hechos y aquella de interposición de éstas, han transcurrido con creces los plazos de cuatro o cinco años previstos en los artículos 2322 y 2515 del Código Civil, respectivamente.

Si bien dichos argumentos tienen plena aplicación en nuestro ordenamiento jurídico en relación al derecho común, esta alegación debe ser rechazada para el caso *sub judice*, por cuanto el plazo de prescripción de la responsabilidad extracontractual y ordinaria, de cuatro y cinco años, respectivamente, invocados por el Fisco de Chile no son aplicables en la especie, atendida la naturaleza y origen del daño cuya reparación ha sido solicitada, pues dichos plazos de prescripción, en esta clase de acciones, no ha de computarse, necesariamente, desde la ocurrencia del hecho que debe ser indemnizado, como es la regla general.

En concepto de este sentenciador, por tratarse de una violación a los Derechos Humanos el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil encuentra ínsito en las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior, ha de ser necesariamente así porque este fenómeno de transgresiones tan graves, es muy posterior al proceso de codificación y por ello, el legislador de antaño no los consideró, por cuanto sólo se representó criterios claramente ligados al interés privado, sin que fuera posible advertir situaciones de quiebres no sólo institucionales y del ordenamiento jurídico, sino también de crímenes que traspasan las barreras del derecho común.

Es por ello que, a modo de ejemplo, resulta pertinente citar los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en las que se previene que cuando ha habido una violación a los derechos humanos, surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Atendida la naturaleza de las normas citadas, en las que no se contempla un estatuto extintivo relacionado con el transcurso del tiempo, claramente, no es posible concebir la prescripción de la acción penal, lo que conduce a preguntarse qué podría justificar que este motivo de extinción de



responsabilidad fuese adjudicado a la responsabilidad civil conforme con los extremos del Derecho privado si la responsabilidad penal siempre será exigible.

La pregunta formulada busca la explicación acerca del motivo que justificaría enfrentar la responsabilidad penal a partir de criterios particulares propios de la naturaleza del hecho, y al mismo tiempo ocuparse de la responsabilidad civil desde orientaciones válidas para otras materias. En este punto una primera aproximación interpretativa nos llevaría a concluir que, si donde existe la misma razón, se aplica la misma disposición, es inconcuso que la responsabilidad civil debe asumir el mismo tratamiento que la punitiva.

Por otro lado, la cuestión de los Derechos Fundamentales constituye un sistema, y por tal razón, no es posible interpretar los hechos que los afecten y las normas que los regulan de una manera aislada, como tampoco pueden introducirse normas que sean consecuencia de otros criterios orientadores vinculados a finalidades que exceden la naturaleza de esta clase de derechos, como son las que han sido invocadas por la demandada, porque toda conclusión alcanzada en tales circunstancias, necesariamente, será contraria al sistema jurídico de los Derechos Fundamentales.

El mismo Andrés Bello, al concebir las normas sobre interpretación de la ley, hizo presente en el artículo 22 del Código Civil que *“el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.*

Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto”.

Por lo mismo, no se advierte ninguna razón para hacer una distinción relacionada con la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos de lesa humanidad, con la imprescriptibilidad en materia de responsabilidad del Estado, derivada de la comisión de dichos ilícitos.

Por ello, ha de entenderse que la cuestión de la prescripción de la acción indemnizatoria, no puede ser resuelta con un enfoque plasmado en las normas del Derecho privado, porque estas atienden fines diferentes y en pasaje alguno del Código Civil, se hace mención a los ilícitos relacionados con vulneración a los derechos humanos.



Si por un minuto, aceptásemos la tesis de la resistencia opuesta por el Fisco de Chile, ciertamente, se vulneraría la citada norma de la Convención Americana de Derechos Humanos y, además, la del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos de Derecho internacional, establece para los órganos del Estado el deber de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que ha de situarse el de indemnización que ha sido invocado en estos autos.

En este aspecto, no está demás hacer presente que las normas de derechos fundamentales han de ser interpretadas sobre la base del denominado principio “*pro homine*”, es decir, a favor de la persona humana, motivo por el cual, debe preferirse aquel ejercicio hermenéutico que tienda dar protección y reparación integral a la víctima de la vulneración de un derecho fundamental por parte del actuar sistemático del Estado en orden a vulnerar los derechos humanos.

Décimo sexto: Que por último, esta excepción de prescripción deberá ser rechazada utilizando como criterio y herramienta jurídica el denominado “control de convencionalidad”, institución que busca que los Estados se abstengan de aplicar normas contrarias a la *Convención Americana sobre Derechos Humanos* (CADH) o a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta doctrina que emana del Control de Convencionalidad exige que los jueces y otros órganos nacionales dejen sin aplicación la legislación nacional cuando la misma resulte contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos o a la interpretación que de ella haga la Corte Interamericana, siendo este el último caso que este sentenciador abordará.

En efecto, a partir del dictado de la sentencia recaída en el Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, de 29 de noviembre de 2018, específicamente, para nuestro país, se estableció que “*El Estado es responsable por la violación del derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma (...)*”.



El fundamento de la condena del Estado de Chile y las medidas de reparación que se dispusieron en el fallo, descansan, precisamente, en la errada aplicación de la prescripción civil ordinaria en relación con las acciones civiles tendientes a indemnizar a las víctimas de derechos humanos.

En este punto, el fallo en estudio señaló que:

“76. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal se ha referido al amplio contenido y alcances del derecho de acceso a la justicia, en el marco de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma.

77. En particular, en casos de graves violaciones de derechos humanos y de manifiesta obstrucción de justicia, este Tribunal ha considerado que “en ciertas circunstancias el Derecho Internacional considera inadmisibles e inaplicables la prescripción [penal,] así como las disposiciones de amnistía y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, a fin de mantener vigente en el tiempo el poder punitivo del Estado sobre conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas.

78. En relación con lo anterior, este Tribunal es consciente de los desarrollos que existen en el Derecho Internacional en materia de aplicabilidad del instituto jurídico de la prescripción a acciones judiciales para obtener reparaciones frente a graves violaciones de derechos humanos.

79. Así, desde 1989 el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias señaló, en sus Observaciones Generales respecto del artículo 19 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que las ‘acciones civiles de indemnización no [...] estarán sujetas a la prescripción’.

80. El entonces Relator sobre el Derecho a la Restitución, Indemnización y Rehabilitación por Graves Violaciones a los Derechos Humanos, Theo Van Boven, en 1993 señaló que ‘[...] la aplicación de prescripciones priva con frecuencia a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos de las reparaciones a que tienen derecho. Debe



prevalecer el principio de que no estarán sujetas a prescripción las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos. En este sentido, hay que tener en cuenta que las consecuencias de las violaciones flagrantes [...] son el resultado de los crímenes más odiosos que, según opiniones jurídicas muy acreditadas, no deben estar sujetos a prescripción. Además, está suficientemente probado que, para la mayoría de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos, el paso del tiempo no ha borrado las huellas, sino todo lo contrario, pues ha provocado un aumento del estrés postraumático que ha requerido todo tipo de ayuda y asistencia material, médica, psicológica y social durante mucho tiempo'.

81. El Conjunto Actualizado de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, adoptados en 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, incluyó lo siguiente:

Principio 23. Restricciones a la prescripción. La prescripción de una infracción penal, tanto en lo que respecta a las diligencias como a las penas, no podrá correr durante el período en que no existan recursos eficaces contra esa infracción. La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación. [...]

Principio 32. Procedimientos de reparación. Tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o disciplinaria, toda víctima debe tener la posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz, que incluirá las restricciones que a la prescripción impone el principio 23.

82. En 2006 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones. Los principios 6 y 7 de dicho instrumento indican:



6. Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional.

7. Las disposiciones nacionales sobre la prescripción de otros tipos de violaciones que no constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripción de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas.

83. Asimismo, tal como indicó la Comisión, existen algunos desarrollos en la materia en el derecho comparado en ciertos países. Por ejemplo, el Consejo de Estado de Colombia ha emitido múltiples sentencias en que ha inaplicado el plazo de dos años de caducidad de acciones reparación directa contra el Estado, cuando se trata de daños ocasionados por la comisión de un crimen de lesa humanidad, ponderando entre la seguridad jurídica –que buscan proteger los términos de caducidad– y el imperativo de brindar reparación del daño ocasionado en este tipo de delitos:

Desde este punto de vista, la caducidad se institucionaliza como un concepto temporal, perentorio y preclusivo de orden, estabilidad, interés general y seguridad jurídica para los asociados y la administración desde la perspectiva procesal, generando certidumbre y materializando el ejercicio razonable y proporcional que toda persona tiene para hacer valer sus derechos ante las autoridades judiciales.

[...] Todo lo anterior sin perjuicio de las excepciones que ha elaborado la jurisprudencia de esta Corporación cuando ha advertido que los hechos que sustentan el medio de control de reparación directa admiten su encuadramiento como un acto de lesa humanidad [...]

Así, se tiene que los de lesa humanidad se comprenden como ‘aquellos actos ominosos que niegan la existencia y vigencia imperativa de los Derechos Humanos en la sociedad al atentar contra la dignidad humana por medio de acciones que llevan a la degradación de la condición de las personas, generando así no sólo una afectación a quienes físicamente han



padecido tales actos sino que agrediendo a la conciencia de toda la humanidad' [...]

Ahora bien, la importancia del concepto de lesa humanidad para el ámbito de la responsabilidad del Estado consiste en predicar la no aplicación del término de caducidad en aquellos casos en donde se configuren tales elementos, pues, siendo consecuente con la gravedad y magnitud que tienen tales actos denigrantes de la dignidad humana, es que hay lugar a reconocer que el paso del tiempo no genera consecuencias desfavorables para quienes (de manera directa) fueron víctimas de tales conductas y pretenden la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por los daños antijurídicos irrogados en su contra; pues resulta claro que allí no solo se discuten intereses meramente particulares o subjetivos sino también generales que implican a toda la comunidad y la humanidad, considerada como un todo.

En consecuencia, entiende el Despacho que en aquellos casos donde se encuentre configurado los elementos del acto de lesa humanidad o que generen posibilidad que así sea tratado, habrá lugar a inaplicar el término de caducidad del medio de control de reparación directa, conforme a lo expuesto.

(...)

85. Asimismo, tal como lo hicieron notar la Comisión y el propio Estado, la jurisprudencia de los últimos años de la Corte Suprema de Justicia chilena ha variado sustancialmente, declarando en numerosos casos concretos la imprescriptibilidad de la acción civil indemnizatoria por daños derivados de delitos de lesa humanidad, integrando para ello argumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Décimo séptimo: Que la jurisprudencia internacional reproducida en el motivo precedente, entendida como la doctrina que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha puesto de relieve que la aplicación del estatuto de la prescripción de las acciones de reparación patrimonial derivada de los delitos de lesa humanidad resulta inadmisibles, habiendo incurrido nuestro país, en responsabilidad internacional por dicha forma errada de interpretar el Derecho, al hacer aplicable estatutos jurídicos totalmente disímiles a la interpretación que viene sosteniendo la referida



Corte en asuntos derivados de dicha reparación patrimonial y que subyace, con ocasión de los ilícitos cometidos agentes del Estado en tiempos de dictadura, los que son calificados como crímenes de lesa humanidad.

Décimo octavo: Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un rol principal en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Consciente de su papel, la Corte busca tener un amplio impacto en el panorama de los derechos humanos en el Hemisferio, para lo cual desarrolló la doctrina del *control de convencionalidad*, que busca expandir el efecto de sus sentencias. En términos generales, esta doctrina es algo similar a la idea de control de constitucionalidad, pero con varias diferencias clave, principalmente, su aplicación en el ámbito del Derecho internacional (v. Paúl Díaz, Álvaro, *Los enfoques acotados del control de convencionalidad: las únicas versiones aceptables de esta doctrina*, en Revista de Derecho (Concepción), vol. 87, N°246, dic. 2019).

No está demás decir que esta fuente del derecho internacional nació, a propósito de otro incumplimiento internacional por parte del Estado de Chile, esta vez, en el caso Almonacid Arellano vs. Chile.

Por lo anterior, si se realiza el debido contraste entre la doctrina que emana del fallo internacional antes citado con el caso *sub judice*, queda de manifiesto que resulta inadmisibles aplicar la prescripción, ya que dicha institución cede ante las fuentes del derecho internacional, dentro de las cuales, se encuentra la sentencia del Caso Órdenes y otros vs. Chile, que señala su improcedencia.

Décimo noveno: Que, además, la demandada ha sostenido improcedentes las indemnizaciones al haber sido ya reparados integralmente con compensaciones otorgadas en el marco de la justicia transicional, sea mediante transferencias directas de dinero, otras reparaciones simbólicas y/o satisfactivas, y que han sido parte importante de la reparación por los daños morales causados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que se ha efectuado a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones.

Afirmó que lo pretendido fue entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir o



morigerar el daño moral. Asimismo, la demandada hizo referencia a la identidad de causa entre lo pedido en autos y las reparaciones realizadas.

Así, concluyó que los esfuerzos del Estado para reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos no solo han cumplido todos los estándares internacionales de justicia transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con la realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencias de tales violaciones. Los referidos mecanismos de reparación han compensado parcialmente aquellos daños no pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones.

Sobre el particular, si bien con la prueba rendida este sentenciador acepta el hecho que el actor esta favorecido con la pensión referida, no puede hacerse lugar a una excepción de esa naturaleza, porque la ley que las previno no las estableció con carácter excluyente, de suerte tal que no es posible concluir que por su otorgamiento son improcedentes las indemnizaciones que ahora se solicitan, por lo mismo solamente nos cabe rechazar tal alegación del Fisco de Chile;

Vigésimo: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del cobro de reajustes e intereses, el Fisco de Chile plantea que éstos solamente pueden devengarse en la medida que la sentencia los acoja y la obligación se establezca, los que sólo podrán devengarse, para el evento que se acoja la pretensión del actor civil, desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y el representado de la defensa incurra en mora.

Sobre el particular, este sentenciador estima que este planteamiento es acertado, particularmente, porque este punto no ha sido reglamentado por el Derecho Internacional y por ello debemos recurrir a las normas del derecho común.

Es por ello que en relación con el cobro de los reajustes e intereses, los mismos se devengarán desde la fecha en que el presente fallo quede ejecutoriado, de conformidad a lo dispuesto en artículo 1557 del Código Civil, en relación con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.

Vigésimo primero: Que, rechazadas las alegaciones y excepciones anteriores, hay que hacerse cargo de la cuantificación del daño moral,



conforme a los perjuicios provocados y para establecerlo, se cuenta con la prueba establecida en considerando quinto de este fallo.

En este punto, la Evaluación psicológica de don **Manuel José Gutiérrez Córdova** emitido por el PRAIS Metropolitano Sur Oriente, de 8 de marzo de 2021, da cuenta que el actor fue gravemente afectado, experimenta un proceso de duelo que se ve recrudecido, no solamente por la afectación psicológica presente propia de un proceso de esa índole, si no por las variables vinculadas a la violencia del Estado. No se trata meramente de la pérdida del país que añoraba por decisión individual de prosperar, sino que estaba presente el miedo de perder la vida, por lo que por temor plausible dejó el suelo nacional. Además, le repercutió debido a los sentimientos de soledad que refiere y la añoranza de su país.

Sostuvo que el usuario presenta secuelas principalmente psicológicas en la actualidad, con sintomatología concordante con un trastorno de estrés postraumático crónico.

El documento no fue objetado de contrario, motivo por el cual, debe ser valorados conforme las reglas de los artículos 1700 y 1702 del Código Civil y al efecto, se puede establecer, nítidamente, las secuelas que produjeron en el actor los apremios ilegítimos de que fue víctima con ocasión de su detención.

Conforme a los antecedentes antes analizados, es evidente que en contextos de abuso y vulneración de Derechos Humanos, emerge un concepto e institución fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el Daño Moral, bajo la dimensión del *pretium doloris*, institución que es concebida por nuestra jurisprudencia como las aflicciones, pesares, molestias y sufrimientos que experimenta una persona como consecuencia de maniobras de tortura, maltrato físico y psicológico, considerados hechos ilícitos que deben ser indemnizados.

Sobre la base de lo anterior y dadas las graves secuelas producidas por los hechos ilícitos que lamentablemente vivenció el actor con ocasión de las torturas de que fue víctima y que fueron descritas en extenso en el motivo séptimo de este fallo, sumado a que se vio obligado a abandonar su país y radicarse en Estados Unidos alejado de sus familiares, lo que aún al día de hoy le afecta, este sentenciador estima prudente y de justicia regular



el monto de la indemnización por concepto de daño moral en la suma de **\$40.000.000** (cuarenta millones de pesos), la que se condice con las circunstancias lesivas establecidas en el proceso y sus secuelas posteriores.

Vigésimo segundo: Que, respecto de don **Raúl Hernán**, la Evaluación psicológica emitida por el PRAIS Metropolitano Sur Oriente, de 8 de marzo de 2021, da cuenta que el actor fue gravemente afectado. Explica que parte de la sintomatología que ha estado presente en su vida cotidiana, está considerada dentro de lo que se conoce como trastorno de estrés postraumático y un trastorno depresivo mayor, que se muestran crónicas, y respecto del trastorno de estrés postraumático, debido a lo específico del daño que ocasiona la violencia del Estado por la prisión y tortura, adquiere un carácter distinto a otras situaciones que gatillan dicha sintomatología. Además, la edad temprana de don Raúl al momento de la detención, involucra una experiencia traumática que fue determinante para todo su desarrollo posterior.

Agrega el informe, que producto de las secuelas de la violencia del Estado, se reactivan constantemente los recuerdos de la experiencia de tortura, actualizando la experiencia traumática. Se produce una ruptura del equilibrio en la vida del actor, debido al estrés extremo y prolongado provocado.

El documento no fue objetado de contrario, motivo por el cual, debe ser valorados conforme las reglas de los artículos 1700 y 1702 del Código Civil y al efecto, se puede establecer, nítidamente, las secuelas que produjeron en el actor los apremios ilegítimos de que fue víctima con ocasión de su detención.

Conforme a los antecedentes antes analizados, es evidente que en contextos de abuso y vulneración de Derechos Humanos, emerge un concepto e institución fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el Daño Moral, bajo la dimensión del *pretium doloris*, institución que es concebida por nuestra jurisprudencia como las aflicciones, pesares, molestias y sufrimientos que experimenta una persona como consecuencia de maniobras de tortura, maltrato físico y psicológico, considerados hechos ilícitos que deben ser indemnizados.



Sobre la base de lo anterior y dadas las graves secuelas producidas por los hechos ilícitos que lamentablemente vivenció el actor con ocasión de las torturas de que fue víctima y que fueran descritas en extenso en el motivo octavo de este fallo, y considerando además las secuelas en los ojos presentes al día de hoy, en especial la pérdida de visión en el ojo derecho, este sentenciador estima prudente y de justicia regular el monto de la indemnización por concepto de daño moral en la suma de **\$50.000.000** (cuarenta millones de pesos), la que se condice con las circunstancias lesivas establecidas en el proceso y sus secuelas posteriores.

Vigésimo tercero: Que en cuanto a la petición subsidiaria de rebaja del monto pedido, fundado en los parámetros establecidos por otras sentencias en la materia, deberá estarse a lo resuelto, máxime considerando que el monto fijado se adecua a los baremos que ordinariamente se fijan por los tribunales superiores para casos como el de marras.

Vigésimo cuarto: Que la suma ordenada pagar en los motivos vigésimo primer y vigésimo segundo, se reajustará conforme a la variación del índice de precios al consumidor por el periodo que media entre que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y el pago efectivo.

En el mismo período, las sumas referidas devengarán interés corriente, de conformidad a lo dispuesto en artículo 1557 del Código Civil, en relación con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.

Vigésimo quinto: Que atento lo resuelto y siendo acogida la demanda en su parte esencial, se condena al Fisco de Chile al pago de las costas del juicio por haber resultado vencida.

Por estas consideraciones, normas legales e internacionales citadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, 170 y 144 del Código de Procedimiento Civil **se decide:**

I. Que **se acoge** la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por **don Manuel José Gutiérrez Córdova** y **don Raúl Hernán Gutiérrez Córdova**, en contra del **Fisco de Chile**.

II. Que **se rechazan**, en consecuencia, todas las alegaciones y excepciones principales deducidas por el Fisco de Chile.



III. Que a título de indemnización, por concepto de daño moral se dispone el pago de la suma de **\$40.000.000** (cuarenta millones de pesos) señalada en el motivo vigésimo primero para don **Manuel José Gutiérrez Córdova**; y la suma de **\$50.000.000** (cincuenta millones de pesos) señalada en el motivo vigésimo segundo para don **Raúl Hernán Gutiérrez Córdova**.

IV. Que en cuanto al planteamiento subsidiario formulado por el Fisco de Chile, ha de estarse a lo resuelto en el romano precedente.

V. Que la suma ordenada pagar lo será conforme a los reajustes e intereses establecidos en el motivo décimo noveno.

VI. Que **se condena** en costas al Fisco de Chile.

Regístrese, notifíquese, consúltese si no se apelare y en su oportunidad, archívese.

Rol N° C-5691-2020.

Pronunciada por don **Patricio Hernández Jara**, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, once de agosto de dos mil veintidós.**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QGKFXXXJPEV